Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

**Visto** el expediente relativo al recurso de revisión **01259/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**, en lo sucesivo se le denominara **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00007/PLEGISLA/IP/2024**, por parte del **Poder Legislativo**, en lo sucesivo **EL SUJETO OBLIGADO;** se procede a dictar la presente resolución, con base en lo siguiente.

**A N T E C E D E N T E S**

**1.** **SOLICITUD DE INFORMACIÓN.** Con fecha once de enero de dos mil veinticuatro, **LA PARTE RECURRENTE**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **EL SUJETO OBLIGADO**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número de expediente**00007/PLEGISLA/IP/2024**,mediante la cual solicitó la siguiente información:

*“Anexo solicitud de información al Poder Legislativo del Estado de Mexico” (Sic).*

**LA PARTE RECURRENTE** adjuntó los siguientes archivos electrónicos:

“***ANEXO 3 (1).pdf***”: Comprobante de solicitud en línea y recibos de pago.

“***TRANSPARENCIA COMISION AMNISTIAS.pdf***”: Oficio de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dirigido por el particular, mediante el cual señala lo siguiente:

1. Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada Comisión Especial de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México (CEA), que en cumplimiento a los Lineamientos SEGUNDO y TERECRO, nos informen cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias se han realizado, (ya sea por cada semana o cuando haya sino necesaria) desde que se instaló la CEA y si cualquier integrante diputada o diputado solicito reunirse para atender las solicitudes de amnistía, nos señalen el o los nombres de las o los diputados que convocaron a reuniones colegiadas.

Les solicitamos en copias certificadas de cada una de las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias que ha realizado la CEA desde su constitución, las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día de los temas que se desahogaron, el quorum, las votaciones que se realizaron y los diputados que suscribieron las citadas actas.

2. Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA, si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos que interpusimos por las opiniones consultivas desfavorables resueltas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a las solicitudes de amnistías de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), que presentamos ante la CEA de la LX y LXI Legislatura del Estado de México.

3. Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA de la LXI Legislatura del Estado de México, si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos que interpusimos, y de manera concreta como resolvieron los actos reclamados que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, les solicito que aclararen e informe en cada uno de los amparos indirectos que interpusimos como autoridad responsable a la CEA LXI Legislatura del Estado de México los actos reclamados son los siguientes:

“IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. De la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México se reclaman:

(…)

Que nos informe como se resolvió negar los actos reclamados descritos con anterioridad ante los órganos jurisdiccionales, que diputados estuvieron en pro y en contra en negar o aceptar los actos reclamados. Cuáles fueron los argumentos y los más importantes como se voto está resolución, toda vez que negar los actos reclamados se tuvo que haber resuelto por el pleno de los diputados como Autoridad Responsable que integran la CEA.

Les solicitamos copias certificadas de las Actas que resolvió negar los Actos Reclamados deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y resolvió el tema de los amparos indirectos de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, por las opiniones con los votos en pro y en contra, el quorum y los diputados que suscribieron las citadas actas.

4. Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA, sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por la mutilación, pérdida o mal uso de la base de datos de la solicitudes de amnistías, en donde se registró la información que acreditada la “violación de derechos o fallas en la aplicación de algunos de los principios penales del sistema acusatorio o la plena presunción de fabricación de delitos”, tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Amnistía del Estado de México.

¿Por qué la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández presidentes de la CEA: no enviaron la base de datos que adjuntamos a nuestra solicitud de Amnistía, al Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para que resolvieran las Opiniones Consultivas?

¿Por qué la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA enviaron a los Órganos del Estado antes señalados, nuestras solicitudes de amnistía por la vía de la plataforma, cuando Presunción de Inocencia y Derechos Humanos las presentamos de manera escrita y anexamos en cada entrega la base de datos?

¿Por qué cuando enviaron nuestras solicitudes la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA, lo realizaron por la plataforma y de manera escrita, mutilaron nuestras bases de datos y no fueron incluidas para que se emitieran las Opiniones Consultivas?

Ante la mutilación de nuestras solicitudes de amnistías, de la bases de datos y de la pérdida de la información de datos personales en posesión de sujetos obligados de las Personas Privadas de la Libertad, ¿los integrantes de la CEA, concretamente la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, cumplieron resguardando y protegiendo el tratamiento de la información y de la documentación que se le sometieron a su consideración de ellos y de todos los integrantes de la Comisión Colegiada y que sería la responsabilidad de sus integrantes y demás servidores públicos que conocieron nuestras bases de datos y nuestras solicitudes?,

Les solicitamos copias certificadas de cada una de las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias que realizó la CEA, por lo relevante del manejo de las bases de datos, es decir de los datos personales que se integraron como anexo en cada una de nuestras solicitudes de amnistías, porque fueron manipulados, mutilados, congelados y por el trato discriminatorio que nos dieron a nuestras solicitudes por parte de la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA.

También deberán incluir la información pública del el informe del diputado Sergio García Sosa que rindió en el Amparo Indirecto 1180/2022-VI, (por la resolución de la CODHEM de las Opiniones Consultivas Desfavorables) interpuesto por Presunción Inocencia y Derechos Humanos, ante el Juzgado Sexto de Distrito con Residencia en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en donde, el legislador presento y acredito la documental pública de fecha 29 de noviembre de 2022 y con el oficio número: SAP/CJ/1231/2022, en donde se comprueba la mutilación de nuestras solicitudes y la base de datos de amnistía de Presunción de inocencia y Derechos Humanos. Las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y en contenido que resolvió el tema de nuestras solicitudes de amnistía, nuestros datos personales de nuestras base de datos de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, el quorum, las votaciones que se realizaron, los diputados que suscribieron las citadas actas

Sí se resolvió iniciar el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa o penal en contra de la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA.

5. Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA, sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por lo señalado por el diputado Sergio García Sosa que se rescataron 930 solicitudes de amnistías que estaban congeladas, es decir estas solicitudes en su mayoría son de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, por una postura de discriminación asumidas por, la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA.

Les solicitamos copias certificadas de cada una de las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias que realizó la CEA, por lo relevante de los amparos indirectos que perdieron en la etapa de revisión por notoriamente improcedente los Colectivo Zeferino Ladrillero y “Haz Valer Mi Libertad”, así como también que se discutió y resolvió la CEA con respecto a los criterios o tesis que resolvieron los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito. También solicitamos copia certificada de la queja de oficio que interpuso el presidente de la CODHEM el Dr. Jorge Olvera García para que se investigara los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México.

También solicitamos información de cómo se discutió y resolvió el caso que se presentó el pasado 10 de febrero de 2023 en donde, el PJEM con el número de solicitud 2096/2023 le dio la entrada a la solicitud de amnistía por caso sospechoso promovida por la titular de la CDHEM, capturada la petición por Estefanía Guadalupe Hernández Guzmán y el beneficiario Raúl Martínez Vázquez, que le asignaron dos números de expedientes: CODHEM/NEZA/AMN/152/2022 y CODHEM/NEZA/TEXC/9/2021.

Las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y el contenido que resolvió en los temas expuestos en este punto número 5, el quorum, las votaciones que se realizaron, los diputados que suscribieron las citadas actas.

“***ANEXO 2.pdf***”: Nota periodística del veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

“***ANEXO 1.pdf***”: Oficio de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Diputado Sergio García Sosa, dirigido al Juzgado Sexto de Distrito con Residencia en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual le señala que en cumplimiento del acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le requirió remitiera copia certificada de las constancias referida, estableciendo que se remite copia certificada de los acuses de los oficios por los que se remitió la “base de datos” identificada en los oficios como “medio magnético” a las instancias correspondientes y que se relaciona con las solicitudes de amnistía recibidas por la Comisión Especial de Amnistía de la Legislatura del Estado de México.

Oficio de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Sergio García Sosa, dirigido al Presiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual señala que le remite en medio magnético para complementar los expedientes entregados con anterioridad por parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

Oficio de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Sergio García Sosa, dirigido al Secretario de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual señala que le remite en medio magnético para complementar los expedientes entregados con anterioridad por parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

Oficio de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Sergio García Sosa, dirigido a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual señala que le remite en medio magnético para complementar los expedientes entregados con anterioridad por parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

Oficio de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Sergio García Sosa, dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, mediante el cual señala que le remite en medio magnético para complementar los expedientes entregados con anterioridad por parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

Acuerdo de certificación de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés.

“***CASO SOSPECHOSO.pdf***”: Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

**2.** **DE LA PRÓRROGA.** En fecha primero de febrero de dos mil veinticuatro, **EL SUJETO OBLIGADO** solicitó una prórroga para la entrega de la información requerida en la solicitud de acceso a la información, tal como se observa a continuación:

*“Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*El servidor público habilitado de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 163 de la Ley de la Materia, ha solicitado la ampliación del plazo de respuesta hasta por siete días, debido a que se sigue realizando la búsqueda necesaria en los archivos correspondientes, para determinar si obra en ellos el documento que permita darle respuesta. En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento que el Comité de Transparencia en la 05° Sesión Extraordinaria de fecha 01/02/2024, mediante Acuerdo PLEGISLA/LXI/CT/05ªext/2024/TERCERO, ha tenido a bien aprobar la ampliación del plazo solicitado, en términos del artículo 49 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. En ese sentido, una vez que haya concluido la búsqueda de los documentos requeridos, este Sujeto Obligado lo hará de su conocimiento dentro de los plazos establecidos en la Ley.*

*Jesús Felipe Borja Coronel*

*Responsable de la Unidad de Transparencia”*

Para tal efecto **EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó el archivo electrónico:

“***Acuerdo PLEGISLA-LXI-CT-05ªext-2024-TERCERO.pdf***”: Acuerdo PLEGISLA/LX/CT/05°ext/2024/TERCERO emitidó por el Comité de Transparencia, mediante el cual hacen valer la ampliación para dar respuesta a la solicitud de información en términos del artículo 49 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, toda vez que se está realizando la búsqueda de la información.

**3. RESPUESTA.** Con fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, **EL SUJETO OBLIGADO** otorgó, a través del SAIMEX, respuesta a la solicitud de acceso a la información de la siguiente manera:

*“Por su parte, toda vez que en su solicitud inicial la modalidad de entrega seleccionada fue “Copias Certificadas”, en términos de los artículos 17 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como el artículo 148, fracción II, incisos A) y B), del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con la finalidad de obtener copia simple de la referida información, usted deberá cubrir un costo total de $414.41 (cuatrocientos catorce pesos 41/100 M.N) a favor del Poder Legislativo, mismo que se desprende del siguiente cálculo: Concepto Número de veces el valor de la UMA por hoja Equivalente en pesos mexicanos Número de hojas Costo Total II. Copias certificadas A) Por la primera hoja. 0.850 $ 92.2845 4 $ 369.138 B) Por cada hoja subsecuente. 0.417 $ 45.27369 1 $45.27369 TOTAL 5 $ 414.41 Dicho costo deberá ser cubierto mediante pago con LÍNEA DE CAPTURA que para tal efecto emita la Caja General del Poder Legislativo el día que acuda a la entrega de la información solicitada, debiendo proporcionar los siguientes datos obligatorios: • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave; • Nombre o Razón Social; • Concepto de Pago (ejemplo: cuatro documentos en copias certificadas, para la solicitud de acceso a la información 00007/PLEGISLA/IP/2024); • Importe a pagar: $414.41 (cuatrocientos catorce pesos 41/100 M.N) • Correo electrónico al que será enviado el comprobante fiscal (CFDI); • Código Postal de la Constancia de Situación Fiscal; • Uso del CFDI; • Copia de la Constancia de Situación Fiscal por ambos lados, y; • Observaciones (ejemplo: solicitud de acceso a la información 00007/PLEGISLA/IP/2024). Una vez generada la LÍNEA DE CAPTURA, deberá ser cubierto el costo con la finalidad de proceder a la entrega de las COPIAS CERTIFICADAS. En este sentido, se pondrá a su disposición la información referida, en la oficina de esta Unidad de Información, sita en Avenida Independencia Ote. 102, planta baja, colonia Centro, Toluca, Estado de México, en días hábiles en un horario de 11:30 a 17:00 hrs.*

*ATENTAMENTE*

*Jesús Felipe Borja Coronel*

*Responsable de la Unidad de Transparencia*

*Poder Legislativo”*

**LA PARTE RECURRENTE** adjuntó los siguientes archivos electrónicos:

“***Respuesta Sol. 007- SAP- Copias Certificadas.pdf***”: Oficio de fecha trece de febrero de dos mil veinticuatro, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual señala que el servidor público de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, ha notificado la respuesta conforme a lo siguiente:

“Me permito informarle que, luego de un análisis del contenido de la solicitud, se turnó para su atención a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Amnistía de la “LXI” Legislatura del Estado de México, misma que en su respuesta manifiesta que, toda vez que se solicitó documentación certificada, se indique al solicitante el procedimiento a seguir para el pago correspondiente y así estar en aptitud de entregarla, particularmente son 4 los documentos que serán certificados, 3 de ellos constan de una foja y 1 consta de una sola foja.”

Además, señala que en la solicitud se selecciona la modalidad de “Copias Certificadas”, con la finalidad de obtener copia simple de la información, deberá cubrir un costo total de $414.41 (cuatrocientos catorce pesos 41/100 M.N) a favor del Poder Legislativo.

El costo deberá ser cubierto mediante pago con LÍNEA DE CAPTURA que para tal efecto emita la Caja General del Poder Legislativo, al obtener la línea de captura, deberá ser cubierto el costo con la finalidad de proceder a la entrega de las copias certificadas, en la oficina de la Unidad de Información, en la Avenida Independencia Ote. 102, planta baja, colonia Centro, Toluca, Estado de México, en días hábiles en un horario de 11:30 a 17:00 horas, en donde se tendrá disponible la información solicitada durante un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de que hubiese realizado el pago.

“***7 RESPUESTA (1).pdf***”: Oficio de fecha trece de febrero de dos mil veinticuatro, en donde se señala que luego de un análisis del contenido de la solicitud, se turnó a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Amnistía de la “LXI” Legislatura del Estado de México, misma que en su respuesta manifiesta que, toda vez que se solicitó documentación certificada, se indique al solicitante el procedimiento a seguir para el pago correspondiente y así estar en aptitud de entregarla, particularmente son 4 los documentos que serán certificados, 3 de ellos constan de una foja y 1 consta de dos fojas.

Asimismo, se indica que en los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, se encuentra el expediente formado con motivo del amparo 1180/2022-VI del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con Residencia en Toluca, mismo que se deja a disposición del solicitante para consulta, señalando que el mismo se encuentra totalmente concluido, sin ningún acto procesal por desahogar.

“***07 RESPUESTA (COM ESP AMNISTIA).pdf***”: Oficio de fecha nueve de febrero de dos mil veinticuatro, signado por el Presidente de la Comisión Especial de Amnistía de la “LXI” Legislatura del Estado de México, en donde responde a la solicitud de la siguiente forma:

Del numeral 1:

La información encontrada en los archivos correspondientes, se tiene que, en total la Comisión Especial de Amnistía ha celebrado cuatro reuniones, entregando una relación de las reuniones de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la Legislatura.

Del numeral 2:

De la información encontrada en los archivos correspondientes, se tiene que, la Comisión Especial de Amnistía, ha celebrado cuatro reuniones, conforme al cuadro indicado en el numeral 1.

En el numeral 3:

En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, no se encontró información coincidente con lo planteado

En el numeral 4:

En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, no se encontró información coincidente con varias de las preguntas planteadas.

En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, se encuentra el expediente formado con motivo del amparo 1180/2022-VI del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, mismo que se deja a disposición del solicitante para consulta, señalando que el mismo se encuentra totalmente concluido, sin ningún acto procesal por desahogar.

En el numeral 5:

En los archivos correspondientes, se tiene que la Comisión Especial de Amnistía, no se encontró información coincidente con varios planteamientos en este numeral.

**4. DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Inconforme con la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**,en fecha seis de marzo de dos mil veinticuatro, **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **01259/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual manifiesta, lo siguiente:

1. ***Acto Impugnado:***

*“La resolución de fecha de 13 de Febrero de 2024 con numero de folio 0005/PLEGISLA/IP/2024 y 0007/PLEGISLA/IP/2024” [sic]*

1. ***Razones o Motivos de Inconformidad****:*

*“Entregaron información incompleta” [sic]*

**LA PARTE RECURRENTE**, adjuntó el archivo electrónico “***RECURSO DE REVISIÓN COMISIÓN ESPECIAL.pdf***” el cual en lo medular contiene:

Escrito dirigido por **LA PARTE RECURRENTE** mediante el cual señala que con la primera respuesta el Sujeto Obligado niega toda la información solicitada y destacando que la Comisión Especial de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México señala que solo realizaron cuarto reuniones colegiadas.

Las reuniones se celebraron antes de que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), presentáramos los amparos indirectos en contra de las Opiniones Consultivas desfavorables, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), con la información se señala que se celebraron dos reuniones para la instalación de la Comisión de 10 de marzo de 2021y 26 de octubre 2021, y dos reuniones de asuntos propios con fechas 23 de junio de 2021 y 23 de julio de 2021, es decir, no realizaron ninguna referente a las reuniones que se tenían que realizarse por los amparos colectivos y con esto se niega la segunda petición.

Esto acreditan cuando en las siguientes peticiones no respondieron porque no existían la información procesada y no existió porque ellos con sus omisiones buscaron que no se resolviera ningún caso de delitos de alto impacto, para que no existiera información procesada a favor de los falsos culpables, es decir, que no quedaran precedentes legislativos que la Ley de Amnistía del Estado de México si establece la libertad de los falsos que son inocentes y les fabricaron delitos de alto impacto.

También negaron copia certificada de la queja de oficio que interpuso el presidente de la CODHEM el Dr. Jorge Olvera García para que se investigara los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México.

**5. TURNO.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**6. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Con fecha **once de marzo de dos mil veinticuatro**,este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **SUJETO OBLIGADO** presentará su informe justificado.

**7. MANIFESTACIONES E INFORME JUSTIFICADO.** Con fecha veinte de marzo dos mil veinticuatro se recibió, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) se recibió el informe justificado del **SUJETO OBLIGADO**~~,~~a través del siguiente archivo electrónico:

“***Consideraciones SAP- RR. 01259-Sol. 007-2024.pdf***”: Oficio de fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro, signado por el Presidente de la Comisión Especial de Amnistía de la “LXI” de la Legislatura del Estado de México, mediante el cual ratifica su respuesta inicial.

“***Informe justificado RR. 01259-2024 (sol. 00007-2024).pdf***”: Oficio de fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro, signado por el Titular de la Unidad de Información, mediante el cual describe las constancias que obran en el SAIMEX, señalando que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 191 fracción V de la Ley de la Materia, toda vez que el recurrente impugna la veracidad de la información, reiterando que la respuesta proporcionada por el Presidente de la Comisión Especial de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, ratificando en términos generales la respuesta otorgada.

Documentos que se pusieron a la vista de **LA PARTE RECURRENTE** en fecha quince de agosto de dos mil veinticuatro, mismo que remitió sus manifestaciones conforme a derecho le corresponde mediante el siguiente archivo:

“***RESPUESTA REVISIÓN COMISION AMNISTIA (1).pdf***”: Escrito de fecha veinte de agosto de dos mil veinticuatro, dirigido por **LA PARTE RECURRENTE**, mediante el cual, se adolece por el informe justificado por **EL SUJETO OBLIGADO**, ratificando en términos generales sus razones o motivos de inconformidad.

**8. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER**. El veinte de agosto de dos mil veinticuatro, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**9. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.** El **dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro**, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar el expediente a resolución, en términos del artículo 185 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO. COMPETENCIA.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. OPORTUNIDAD Y PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previsto en el artículo 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contados a partir de la fecha en que **EL SUJETO OBLIGADO** emitió la respuesta, toda vez que esta fue pronunciada el día trece de febrero del año dos mil veinticuatro, mientras que **LA PARTE** **RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en fecha seis de marzo de dos mil veinticuatro, es decir, al décimo quinto día hábil de haber recibido la respuesta.

Ahora bien, del análisis efectuado se advierte que resulta procedente la interposición del recurso y se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, en atención a que fue presentado mediante el formato visible **EL SAIMEX.**

Finalmente, resulta procedente la interposición del recurso, según lo aducido por **LA PARTE RECURRENTE** en sus razones o motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; que a la letra dice:

***“Artículo 179****.* ***El recurso de revisión*** *es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública****, y procederá en contra de las siguientes causas****:*

*(…)*

*V. La entrega de información incompleta;”*

**TERCERO. MATERIA DE LA REVISIÓN.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: verificar si la respuesta e informe justificado otorgado por **EL** **SUJETO OBLIGADO** satisface el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE** **RECURRENTE**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**CUARTO. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.** En primer término, se estima pertinente mencionar que el derecho de acceso a la información está consagrado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano se ha adherido, sin oponer reserva alguna sobre lo que nos interesa, adoptando dichas disposiciones al Derecho Interno, específicamente a nivel Constitucional, tal y como lo prevén los arábigos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 6 apartado A fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII que a la letra señalan:

***“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte****, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

***Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.***

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*** *En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*

*[…]*

***“Artículo 6o.***

*[...]*

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,*** *en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes*** *Ejecutivo, Legislativo* ***y Judicial****, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,* ***es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,*** *en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***

***III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública,*** *a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. [...]*

Así, de la interpretación sistémica de los numerales inmersos en los instrumentos legales Internacionales y Nacional, el derecho de acceso a la información es un derecho del cual goza toda persona sin discriminación alguna, el cual se ejerce ante los Poderes del Estado, entidades, dependencias o cualquiera persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, siendo pública toda la información que posean con las excepciones enmarcadas, para lo cual queda demostrado que el presente sujeto obligado debe cumplir con dichos dispositivos legales.

En primer lugar, es conveniente analizar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** cumple con los requisitos y procedimientos del derecho de acceso a la información pública, en atención a que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados tienen el deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obre en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual a la letra dice:

*“****Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otra parte, conviene mencionar que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México refiere:

***“Artículo 18.******Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad*** *y reutilización de la información que generen.*

***Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados****.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.*

*Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.”*

De los dispositivos legales en comento, se aprecia que todo acto de autoridad en el ejercicio de sus funciones y atribuciones debe estar documentado, por lo que para dar atención a una solicitud de información el Sujeto Obligado debe entregar el soporte documental en donde conste la información requerida, debiendo contemplar que no se trate de información reservada o confidencial, por lo que debe cuidar dicha información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

De ahí que **EL SUJETO OBLIGADO** cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos pudiendo ser de manera electrónica; más aún si la misma se trata de información relativa a obligaciones de transparencia, la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones y obligaciones señaladas por la Ley en la materia[[1]](#footnote-1), así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados[[2]](#footnote-2), como pudiera tratarse de aquella relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 92 de la Ley de la Materia.

En primera instancia, resulta oportuno señalar los siguientes requerimientos:

* Que nos informe como se resolvió negar los actos reclamados descritos con anterioridad ante los órganos jurisdiccionales, que diputados estuvieron en pro y en contra en negar o aceptar los actos reclamados. Cuáles fueron los argumentos y los más importantes como se voto está resolución, toda vez que negar los actos reclamados se tuvo que haber resuelto por el pleno de los diputados como Autoridad Responsable que integran la CEA.
* ¿Por qué la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández presidentes de la CEA: no enviaron la base de datos que adjuntamos a nuestra solicitud de Amnistía, al Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para que resolvieran las Opiniones Consultivas?
* ¿Por qué la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA enviaron a los Órganos del Estado antes señalados, nuestras solicitudes de amnistía por la vía de la plataforma, cuando Presunción de Inocencia y Derechos Humanos las presentamos de manera escrita y anexamos en cada entrega la base de datos?
* ¿Por qué cuando enviaron nuestras solicitudes la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, presidentes de la CEA, lo realizaron por la plataforma y de manera escrita, mutilaron nuestras bases de datos y no fueron incluidas para que se emitieran las Opiniones Consultivas?
* Ante la mutilación de nuestras solicitudes de amnistías, de la bases de datos y de la pérdida de la información de datos personales en posesión de sujetos obligados de las Personas Privadas de la Libertad, ¿los integrantes de la CEA, concretamente la Secretaria Técnica Raquel Consuelo Gómez Méndez, y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, cumplieron resguardando y protegiendo el tratamiento de la información y de la documentación que se le sometieron a su consideración de ellos y de todos los integrantes de la Comisión Colegiada y que sería la responsabilidad de sus integrantes y demás servidores públicos que conocieron nuestras bases de datos y nuestras solicitudes?,
* También solicitamos información de cómo se discutió y resolvió el caso que se presentó el pasado 10 de febrero de 2023 en donde, el PJEM con el número de solicitud 2096/2023 le dio la entrada a la solicitud de amnistía por caso sospechoso promovida por la titular de la CDHEM, capturada la petición por Estefanía Guadalupe Hernández Guzmán y el beneficiario Raúl Martínez Vázquez, que le asignaron dos números de expedientes: CODHEM/NEZA/AMN/152/2022 y CODHEM/NEZA/TEXC/9/2021.

De los puntos en mención, se advierte, que el particular planteó una cuestionamientos con la que pretendía que **EL SUJETO OBLIGADO** le explicara circunstancias para un caso específico, por lo que es obvio que el particular no está ejerciendo su derecho de acceso a la información pública; debido a que en la solicitud consiste en una consulta que no es factible atenderse vía acceso a la información, es decir, que dicho cuestionamiento se colme con documentos que obren en los archivos del **SUJETO OBLIGADO.**

En tal contexto, del análisis realizado al expediente electrónico, se advierte que la solicitud no constituye un derecho de acceso a la información y por lo tanto no es atendible mediante una solicitud de acceso a la información pública, porque se tratan de una consulta para un caso específico, situación que conlleva a afirmar que se está en presencia del ejercicio del derecho de petición.

En ese sentido, es importante diferenciar lo que se entiende por derecho de petición y por derecho de acceso a la información pública.

Derecho de Petición:

El Doctor Ignacio Burgoa Orihuela refiere que derecho de petición: "...*es un Derecho Público subjetivo individual de la Garantía Respectiva Consagrada en al Artículo 8 de la Ley Fundamental. En tal virtud, la persona tiene la facultad de acudir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrito de cualquier índole, la cual adopta, especialmente, el carácter de simple petición administrativa, acción o recurso, etc.*"[[3]](#footnote-3)(Sic)

Por su parte, David Cienfuegos Salgado, concibe al derecho de petición como *“el derecho de toda persona a ser escuchado por quienes ejercen el poder público. [[4]](#footnote-4)” (Sic)*

De la misma manera, Migue Carbonell en su libro “Los derechos fundamentales” refiere que el derecho de petición se ha entendido de dos distintitas maneras, a saber: como un derecho fundamental de participación política ya que permite a los particulares trasladar a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto; y como una forma específica de la libertad de expresión, en tanto que permite expresarse frente a las autoridades. De igual manera que el derecho de petición se traduce en la obligación de todos los funcionarios y autoridades de permitir a los ciudadanos de dirigirse a ellos en demanda de lo que deseen expresar o solicitar y responder de dicha demanda por escrito, de forma congruente y en un plazo breve.[[5]](#footnote-5)

Derecho de Acceso a la Información Pública:

Asimismo, el autor anteriormente citado, indica que el derecho de acceso a la información pública es el derecho de conocer la información de carácter público que se genera o está en posesión de los órganos del poder público o de los sujetos que utilizan o se benefician con recursos provenientes del Estado, es el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a documentos y datos que obren en el poder del gobierno.

Por su parte Ernesto Villanueva define al derecho de acceso a la información pública como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de las entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática.[[6]](#footnote-6)

Del mismo modo, para diferenciar el derecho de petición del derecho de acceso a la información pública, resulta conveniente citar a José Guadalupe Robles, quien conceptualiza el derecho a la información como "un derecho fundamental tanto de carácter individual como colectivo, cuyas limitaciones deben estar establecidas en la ley, así corno una garantía de que la información sea tramitada con claridad y objetividad, por cuanto a que es un ben jurídico que coadyuva al desarrollo de las personas y a la formación de opinión pública de calidad para poder participar y luego influir en la vida pública.”[[7]](#footnote-7)

De ahí que, para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 32, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

De lo anterior se puede concluir que la distinción entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información descansa, principalmente, en que la pretensión del peticionario consiste generalmente en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, mientras que en el derecho de acceso a la información pública la pretensión radica en que se permita el acceso a datos y todo tipo de documentación que tenga el carácter de información pública, que sea generada, administrada o se encuentre en posesión de los considerados Sujetos Obligados por la Ley de la Materia.

Con base a lo anterior, tenemos que **LA PARTE** **RECURRENTE** en su solicitud de información requiere de una explicación o bien una razón a una consulta sobre un caso específico por parte del **SUJETO OBLIGADO**; por consiguiente, la entrega de una razón o la respuesta a cuestionamientos que no encuentren soporte documental alguno, por parte de los Sujetos Obligados no es algo que la Ley de la Materia establezca como atribución, derecho o facultad; pues ello implicaría emitir un juicio de valor referente a cuestionamientos realizados, los cuales como ha quedado explicado, al constituir interrogantes, inquietudes, quejas y manifestaciones resultan estar encaminadas a ser satisfechas en ejercicio del derecho de petición.

Además, es de resaltar que este Instituto de Transparencia como Organismo Garante de difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, conforme a su naturaleza jurídica y a sus atribuciones previstas en los artículos 29, 36 y 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es competente para resolver los recursos de revisión, cuando se niegue la información solicitada, se clasifique la información solicitada, se declare la inexistencia de lo solicitado, el Sujeto Obligado se declare incompetente para atender la solicitud de información, se entregue la información incompleta, se entregue información que no corresponda a lo solicitado, no se dé respuesta a la solicitud, se notifique o se ponga a disposición la información en un formato o modalidad distinto al solicitado, incomprensible o no accesible, respecto de los costos o tiempos de entrega de la información, cuando no se dé trámite a la solicitud, no se permita la consulta directa de la solicitud, se fundamente o motive deficientemente, y/o cuando se oriente a un trámite en específico; todo en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no así cuando se trate de un derecho de petición ejercido por un gobernado; en consecuencia, este Instinto no tiene atribuciones para pronunciarse respecto a las manifestaciones expuestas por el particular ya que son tendentes a que **EL SUJETO OBLIGADO** aclare una inquietud, motivo por el que no resulta oportuno darle atención a los puntos de la solicitud referidos.

Ahora bien, de los puntos que son atendibles mediante el derecho de acceso a la información, se analizaran bajo el siguiente orden:

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** |
| **1.** Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada Comisión Especial de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México (CEA), que en cumplimiento a los Lineamientos SEGUNDO y TERECRO, nos informen cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias se han realizado, (ya sea por cada semana o cuando haya sino necesaria) desde que se instaló la CEA y si cualquier integrante diputada o diputado solicito reunirse para atender las solicitudes de amnistía, nos señalen el o los nombres de las o los diputados que convocaron a reuniones colegiadas.  Les solicitamos en copias certificadas de cada una de las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias que ha realizado la CEA desde su constitución, las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día de los temas que se desahogaron, el quorum, las votaciones que se realizaron y los diputados que suscribieron las citadas actas. | La información encontrada en los archivos correspondientes, se tiene que, en total la Comisión Especial de Amnistía ha celebrado cuatro reuniones, entregando una relación de las reuniones de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la Legislatura. |
| **2.** Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA, si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos que interpusimos por las opiniones consultivas desfavorables resueltas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a las solicitudes de amnistías de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), que presentamos ante la CEA de la LX y LXI Legislatura del Estado de México, para tal efecto, **LA PARTE RECURRENTE**, entrego una relación de los amparos. | De la información encontrada en los archivos correspondientes, se tiene que, la Comisión Especial de Amnistía, ha celebrado cuatro reuniones, conforme al cuadro indicado en el numeral 1. |
| **3.** Le pedimos la información pública al Presidente, al Secretario, Prosecretario y cada uno de los Integrantes de la citada CEA de la LXI Legislatura del Estado de México, si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos que interpusimos, y de manera concreta como resolvieron los actos reclamados que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, les solicito que aclararen e informe en cada uno de los amparos indirectos que interpusimos como autoridad responsable a la CEA LXI Legislatura del Estado de México los actos reclamados son los siguientes:  “IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. De la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México se reclaman:  (…)  Les solicitamos copias certificadas de las Actas que resolvió negar los Actos Reclamados deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y resolvió el tema de los amparos indirectos de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, por las opiniones con los votos en pro y en contra, el quorum y los diputados que suscribieron las citadas actas. | En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, no se encontró información coincidente con lo planteado. |
| **4.** Sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por la mutilación, pérdida o mal uso de la base de datos de la solicitudes de amnistías, en donde se registró la información que acreditada la “violación de derechos o fallas en la aplicación de algunos de los principios penales del sistema acusatorio o la plena presunción de fabricación de delitos”.  Las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias, por lo relevante del manejo de las bases de datos, es decir de los datos personales que se integraron como anexo en cada una de las solicitudes de amnistías, porque fueron manipulados, mutilados, congelados y por el trato discriminatorio.  Las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y en contenido que resolvió el tema de nuestras solicitudes de amnistía, nuestros datos personales de nuestras base de datos de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, el quorum, las votaciones que se realizaron, los diputados que suscribieron las citadas actas | En los archivos correspondientes, se tiene que la Comisión Especial de Amnistía, no se encontró información coincidente con varios planteamientos en este numeral. |
| **5.** Sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por lo señalado por el diputado Sergio García Sosa que se rescataron 930 solicitudes de amnistías que estaban congeladas.  Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias por lo relevante de los amparos indirectos que perdieron en la etapa de revisión por notoriamente improcedente los Colectivo Zeferino Ladrillero y “Haz Valer Mi Libertad”.  Las Actas deberán de contener la fecha, el mes, el día, la hora de inicio, de clausura, el orden del día, como se desahogó y el contenido que resolvió en los temas expuestos en este punto número 5, el quorum, las votaciones que se realizaron, los diputados que suscribieron las citadas actas. | En los archivos correspondientes, se tiene que la Comisión Especial de Amnistía, no se encontró información coincidente con varios planteamientos en este numeral. |

Al respecto, se considera oportuno señalar lo siguiente:

***“LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE MÉXICO***

***Artículo 16.*** *La LX Legislatura del Estado de México con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.*

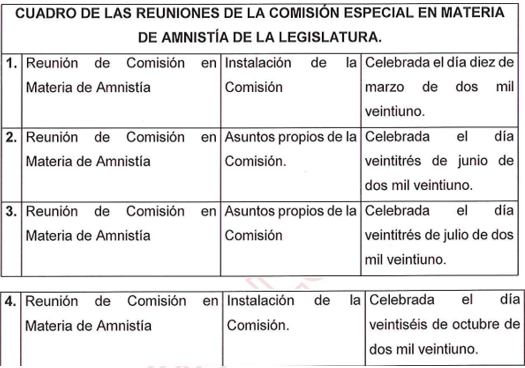
***Artículo 17.*** *La Comisión al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable.”*

De conformidad a lo anterior, la Legislatura del Estado de México, integrara una Comisión Especial solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable.

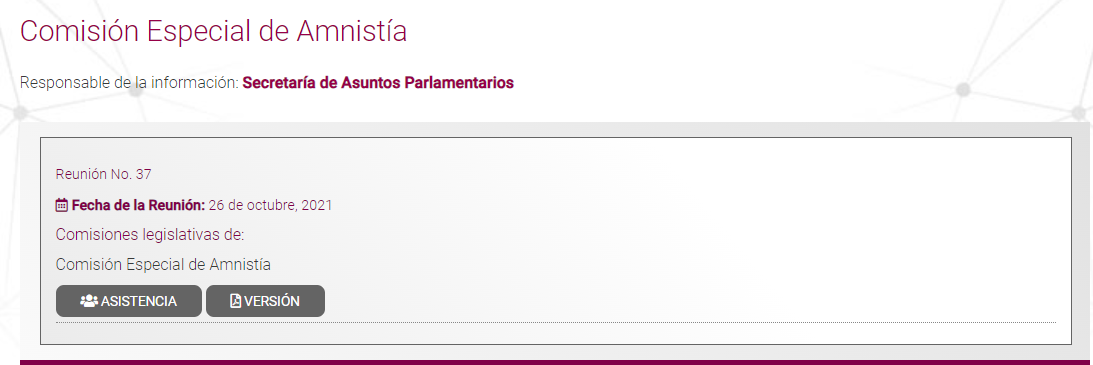
Aclarado lo anterior, se analizara lo establecido en el cuadro que nos antecede de la siguiente forma:

**1. Número de sesiones ordinarias y extraordinarias que se han realizado y si cualquier integrante diputada o diputado solicito reunirse para atender las solicitudes de amnistía y las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias.**

En este punto, **EL SUJETO OBLIGADO**, proporcionó una relación de las sesiones celebras, siendo la siguiente:



Además de lo anterior, se consideró oportuno realizar una búsqueda de información relacionada a las sesiones de la Comisión de Amnistía, en donde únicamente se localizó lo siguiente:



De lo cual, se advierte que la información señalada es lo que obra en los archivos del **SUJETO OBLIGADO,** motivo por el que se ordenan las actas generadas por la reuniones de Comisión Especial de Amnistía referidas en respuesta.

**2. Si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos por las opiniones consultivas desfavorables resueltas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a las solicitudes de amnistías de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), que presentamos ante la CEA de la LX y LXI Legislatura del Estado de México.**

**3. Información si convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia por los amparos indirectos y como resolvieron los actos reclamados que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, actas que resolvió negar los Actos Reclamados, como se desahogó y resolvió el tema de los amparos indirectos de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, por las opiniones con los votos en pro y en contra, el quorum y los diputados que suscribieron las citadas actas.**

**4. Sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por la mutilación, pérdida o mal uso de la base de datos de la solicitudes de amnistías, en donde se registró la información que acreditada la “violación de derechos o fallas en la aplicación de algunos de los principios penales del sistema acusatorio o la plena presunción de fabricación de delitos”.**

**Las Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias, por lo relevante del manejo de las bases de datos, es decir de los datos personales que se integraron como anexo en cada una de las solicitudes de amnistías, porque fueron manipulados, mutilados, congelados y por el trato discriminatorio.**

**5. Sí convocaron a una o varios reuniones ordinarias o extraordinarias, en razón de la relevancia, por lo señalado por el diputado Sergio García Sosa que se rescataron 930 solicitudes de amnistías que estaban congeladas.**

**Actas que se levantaron de las sesiones ordinarias o extraordinarias por lo relevante de los amparos indirectos que perdieron en la etapa de revisión por notoriamente improcedente los Colectivo Zeferino Ladrillero y “Haz Valer Mi Libertad”.**

De los puntos en referencia, **EL SUJETO OBLIGAGO**, señaló en respuesta que ha celebrado cuatro reuniones, conforme al cuadro indicado en el numeral 1 y que no cuenta con información coincidente con lo solicitado en el numeral 2 y 3, no obstante para lo solicitado en el numeral 4 y 5, **EL SUJETO OBLIGADO**, señaló que no se encontró información coincidente con varias de las preguntas planteadas, por lo que su respuesta inicial careció de los principios de congruencia y exhaustividad, como refuerzo de lo anterior, resulta crucial el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de título y texto siguientes:

*“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la se debe señacongruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada en el punto 1, se deduce que no cuenta con reuniones y actas requeridas en el numeral 4 y 5, al respecto, de acuerdo con la respuesta otorgada a los numerales en cuestión, no se trata de un caso por el cual la negación del hecho implique la afirmación de este, simplemente se está ante una notoria y evidente inexistencia fáctica de la información solicitada.

Encontrándonos ante un hecho negativo, destacando entonces que el Pleno de este Organismo Garante, ha sostenido que ante la presencia de un hecho negativo, resultaría innecesaria una declaratoria de inexistencia en términos de los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y ante una hecho negativo resulta aplicable la siguiente tesis:

***“HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.***

*Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por que invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.*

*Amparo en revisión 2022/61. José García Florín (Menor). 9 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.”*

Además, y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente invocado **EL SUJETO OBLIGADO** sólo proporcionará la información que obra en sus archivos, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos; motivo por el cual se colma el derecho de acceso a la información pública del particular, en este punto de la solicitud.

Por lo anterior, lo procedente es dar por colmada la respuesta brindada al requerimiento de información en estos puntos de la solicitud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** |
| 4. Informe del diputado Sergio García Sosa que rindió en el Amparo Indirecto 1180/2022-VI. | En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, no se encontró información coincidente con varias de las preguntas planteadas.  En los archivos correspondientes de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, se encuentra el expediente formado con motivo del amparo 1180/2022-VI del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, mismo que se deja a disposición del solicitante para consulta, señalando que el mismo se encuentra totalmente concluido, sin ningún acto procesal por desahogar. |

Ahora bien, referente al informe que se rindió en el Amparo Indirecto 1180/2022-VI, **EL SUJETO OBLIGADO** refiere que la Comisión Especial en Materia de Amnistía, se encuentra el expediente formado con motivo del amparo 1180/2022-VI del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, mismo que se deja a disposición del solicitante para consulta, señalando que el mismo se encuentra totalmente concluido, sin ningún acto procesal por desahogar, aunado a que la difusión de la información solicitada contribuiría a garantizar el ejercicio de acceso a la información, a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados y servidores públicos, además de fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados.

Por tanto, se concluye que, al tenor de la ponderación realizada, se cumple con los tres elementos para darle preminencia, en el caso concreto, al derecho de acceso a la información.

Motivo por el que se ordena el informe justificado que se rindió en el Amparo Indirecto 1180/2022-VI, en versión pública en términos del considerando quinto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** |
| 5. La queja de oficio que interpuso el presidente de la CODHEM el Dr. Jorge Olvera García para que se investigara los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México. | En los archivos correspondientes, se tiene que la Comisión Especial de Amnistía, no se encontró información coincidente con varios planteamientos en este numeral. |

Si bien, en este punto de la solicitud de información, **EL SUJETO OBLIGADO** no se pronunció de forma concreta, este Instituto localizó la publicación, denominada “SINERGIA Y APOYO MUTUO ENTRE LA CODHEM Y COMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE AMNISTÍA”, publicado en la página web oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, tal como se observa en la siguiente liga electrónica y en la captura que se proporciona a manera de ejemplo:

<https://www.codhem.org.mx/sinergia-y-apoyo-mutuo-entre-la-codhem-y-comision-legislativa-en-materia-de-amnistia/>



Con base a lo anterior, podemos concluir que hay un indicio de que se generó la información relacionada con la queja de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales:

***“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO***

***Conforme al artículo*** [***88 del Código Federal de Procedimientos Civiles***](about:blank) ***los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.*** *Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza****, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar****,* ***de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo****; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.*

*Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.*

*El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.*

*Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.”*

No obstante, de acuerdo a la nota periodística, no se hace referencia que la que queja fuera presentada ante la Comisión Legislativa en Materia de Amnistía, lo que se plasma en la nota, es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó una queja de oficio e investiga los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, motivo por el que se procede analizar la incompetencia manifestada por **EL SUJETO OBLIGADO**, para conocer de la información solicitada.

Por lo tanto, a continuación, se cita la siguiente normatividad:

*“****REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE CARRETERAS ESTATALES Y ZONAS LATERALES***

***Artículo 13.-*** *Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tiene las atribuciones siguientes:*

***I.*** *Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal;*

De acuerdo a la normatividad antes señalada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conoce de quejas o inicia de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, por ello, resulta incompetente para tener en sus archivos la información requerida por el particular.

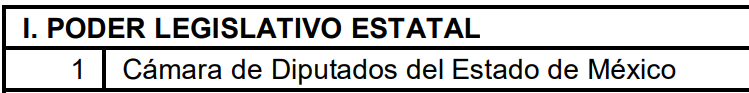
Derivado de lo expuesto, es claro que existe una notoria incompetencia por parte del **SUJETO OBLIGADO** para dar respuesta al requerimiento de información, no obstante, la Unidad de Transparencia no hizo del conocimiento de la persona solicitante dicha circunstancia, incumpliendo así con el párrafo primero del artículo 167, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

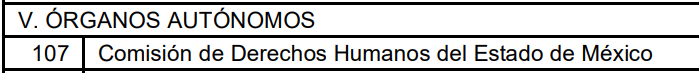
*“****Artículo 167****. C****uando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados,*** *dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y, en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.”*

Del precepto normativo se desprende que cuando las Unidades de Transparencia, determinen una notoria incompetencia por parte de los entes públicos, deben realizar lo siguiente:

* Hacerlo del conocimiento de la persona solicitante, dentro de los tres días hábiles, posteriores a la presentación de la solicitud de información, y
* En caso de conocer el Sujeto Obligado competente, orientarle a presentar la solicitud ante el mismo.

Lo que se robustece con el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, aprueba el Padrón de Sujetos Obligados en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tal como se muestra a continuación:





Conforme a lo anterior, se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** no tiene atribuciones para contar con la información peticionada, toda vez que es información de un sujeto obligado diverso es decir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

En el presente caso la Unidad de Transparencia no manifestó la incompetencia del **SUJETO OBLIGADO** para atender la solicitud, ya que como se ha expuesto anteriormente sí existe un documento que pudiera dar cuenta de la información que es del interés de la persona solicitante, sin embargo, **EL SUJETO OBLIGADO** no cuenta con atribuciones para generar, administrar o poseer el mismo.

En este sentido, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, 53, fracción III y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de los cuales se desprende que las **Unidades de Transparencia son responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso**.

Asimismo, que los **Comités de Transparencia tienen entre sus atribuciones confirmar, modificar o revocar la declaración de incompetencia** que realicen los titulares de las unidades administrativas.

Por lo que, cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de **los sujetos obligados deberán comunicar al solicitante la misma dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud**.

Como se logra observar, si bien la Ley de la materia, prevé el supuesto de incompetencia para que los sujetos obligados den atención a solitudes de información, también lo es, que no se precisa en que consiste dicho concepto; al respecto, Cabanellas, Guillermo (1993), en el “Diccionario Jurídico Elemental” (p. 32 y 161), precisó los siguientes conceptos:

• Competencia: La capacidad de una autoridad para conocer sobre una materia o asunto.

• Incompetencia: Falta de Competencia.

Por lo que, la incompetencia radica en la incapacidad de una autoridad para conocer de un tema o asunto; en el mismo sentido, conviene traer a cuenta tesis aislada número III.2o.P.11 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Pág. 1243, ya que precisa lo siguiente:

*“****LEGITIMACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO, POR ESTAR VINCULADOS CON EL CONCEPTO DE COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN CONOCER DE AQUÉLLA.*** *El artículo 16 constitucional se refiere a la competencia que tienen las autoridades para conocer de determinadas conductas en particular, caso que corresponde a la esfera de atribuciones de las autoridades cuya competencia constituye el análisis del Poder Judicial de la Federación, mas no la forma en que una autoridad fue elegida o integrada, circunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o colegiada que otorgó el nombramiento o, en todo caso, el régimen establecido para ello, porque el precitado artículo constitucional no se refiere a la legitimación de un funcionario, ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa.”*

Asimismo, resulta necesario traer a colación, el Criterio 13/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dispone lo siguiente:

***“Incompetencia.*** *La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.”*

En tal virtud, la **incompetencia** implica que, de conformidad con las atribuciones conferidas al sujeto obligado, no habría razón por la cual este deba contar con la información solicitada, por lo tanto, ordenar al Comité de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** que sesione para que emita un acuerdo en el que confirme la declaratoria de incompetencia para garantizar el derecho de **LA PARTE RECURRENTE** dilata los plazos del procedimiento, genera una carga adicional al Sujeto Obligado, y ello no modifica el hecho de que **LA PARTE RECURRENTE** no obtendrá la información que es de su interés por esta vía, en virtud de que la propia ponencia ha determinado que el Ente Recurrido es notoriamente incompetente para conocer la queja formulada por Jorge García Olvera, (presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) por actos de corrupción cometidos en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, ya que esta se inició por oficio ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no obstante, se dejan a salvo los derechos de **LA PARTE RECURRENTE**, para que formule la solicitud al Sujeto Obligadocorrespondiente.

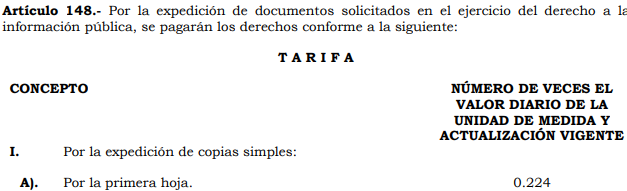
* **RESPECTO A LA MODALIDAD DE ENTREGA.**

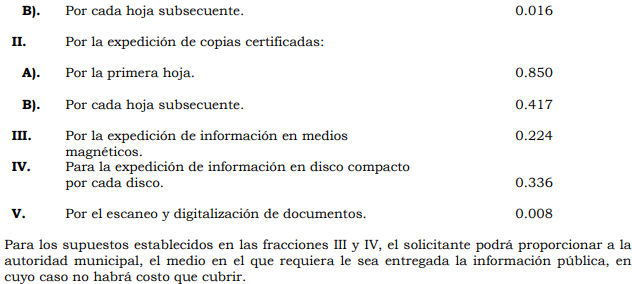
En tal sentido, en el presente caso, la entrega de la información**,** a través de **copia certificada**, como ha sido adelantado, dicha modalidad de entrega recae en el supuesto previsto en el artículo 174 fracciones I, III y párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, citado con antelación.

Asimismo, se precisa que las cuotas de los derechos aplicables para la expedición de documentos solicitados en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran previstas en el Código Financiero del Estado de México, el cual regula la actividad financiera estatal y municipal, entendiendo a dicha actividad la que comprende la obtención, administración y aplicación de los ingresos públicos, así como lo conducente a la transparencia y difusión de la información financiera relativa al presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, en apego a las disposiciones aplicables en la materia.

Por tanto, se tiene que el artículo 7, del Código referido establece que, para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, el Estado y los Municipios percibirán en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de financiamientos, establecidos en la Ley de ingresos. Asimismo, el artículo 9 en su fracción II define a los derechos como las contraprestaciones establecidas en este Código que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Entidad, así como por recibir servicios que preste, el Estado, sus organismos y Municipios en funciones de derecho público.

Así, se tiene que el cobro por la certificación de los documentos a entregar, es un ingreso al que tienen derecho los municipios y su destino es cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, toda vez que es una ganancia lícita que se debe obtener con el cumplimiento de la obligación de **LA PARTE RECURRENTE** a realizar el pago establecido en el artículo 148, fracción II del Código Financiero.



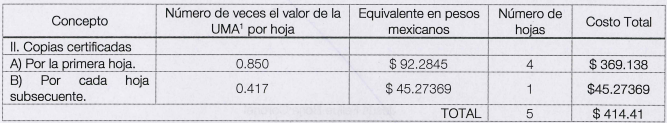


En este sentido, es evidente que la entrega de la información a la particular mediante copias certificadas, procederá una vez que se acredite el pago de derechos correspondiente.

En este sentido se señala que el monto por concepto de derechos, como se lee en el referido precepto legal del Código Financiero, se calcula tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización, UMA, como la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, que es determinado en cada ejercicio fiscal por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuyo valor actual es por la cantidad de $108.74 diarios, como se observa en seguida: 

Así, los derechos por la certificación de la primera hoja, equivalen a 0.850 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, mientras que los derechos para cada una de las subsecuentes equivalen a 0.417 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, $92.2845 la primera hoja, y $45.27369 cada una de las hojas subsecuentes.

Ahora bien, en el caso concreto, **EL SUJETO OBLIGADO** respecto a la entrega de la información en copias certificadas señalo que la información consta de 4 documentos, 3 de ellos constan de una foja y 1 consta de una sola hoja, proporcionando el siguiente cuadro:



No obstante, como se estableció en párrafos anteriores, **EL SUJETO OBLIGADO** resulto omiso de pronunciarse de forma concreta a ciertos puntos de la solicitud, por lo que no se tiene certeza de que sean la cantidad de fojas señaladas.

Asimismo, se precisa que para la entrega de la información certificada tal y como fue solicitada por el particular, debemos tener en cuenta que los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como de los Recursos de Revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; disponen en el numeral treinta y ocho, incisos e), f) y h), que en el caso de que la información se haya solicitado en una modalidad que sea técnicamente factible y que constituya un costo de reproducción, los Sujetos Obligados deberán hacer del conocimiento de los particularespreviamente**, el costo total por la reproducción y certificación de la información requerida,** **así como el procedimiento para la entrega de la misma en el que se establezca: procedimiento para realizar el pago correspondiente, lugar, día y horarios en los que podrá presentarse a recoger las copias certificadas y el nombre del o los servidores públicos que le atenderán, situación que en el presente caso no aconteció, en relación al nombre del o los servidores públicos que le atenderán.**

Asimismo, no debe perderse de vista el contenido del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que señala a la literalidad lo siguiente:

*“****Artículo 166****. La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida* ***cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida,*** *o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.*

***La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles.***

*Transcurridos dichos plazos, si los solicitantes no acuden a recibir la información requerida los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.*

*Cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro del plazo previsto en la Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer el recurso de revisión previsto en este ordenamiento.*

*Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito, dándose por terminado el trámite de acceso a la información.”*

Razón por la cual,para dar cumplimiento a la presente resolución, **EL** **SUJETO OBLIGADO** deberá hacer del conocimiento de **LA PARTE** **RECURRENTE**, vía SAIMEX, **el costo por la reproducción y certificación de la información requerida**, así como el procedimiento para la entrega de la misma una vez que haya efectuado el pago por concepto de derechos, en el que se establezca: lugar, día y horarios en los que podrá presentarse a recoger las copias certificadas, así como el nombre del o los servidores públicos que le atenderán.

También lo es que, en materia de acceso a la información la certificación **únicamente por efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos de la dependencia** o entidad requerida, en ese orden de ideas, **la certificación, para efectos de acceso a la información, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces de un original,** sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran, lo cual deberá quedar precisado en la leyenda de certificación correspondiente.

Sirve de fundamentación a lo antes expresado, el criterio 06/2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

***Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado.*** *Los artículos 125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el artículo 1° de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.*

***Precedentes:***

* *Acceso a la información pública. RRA 1291/16. Sesión del 07 de septiembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Partido Encuentro Social. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*
* *Acceso a la información pública. RRA 1541/16. Sesión del 14 de septiembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.*
* *Acceso a la información pública. RRA 1657/16. Sesión del 05 de octubre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Universidad Nacional Autónoma de México. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov*

Ahora bien, por las circunstancias específicas de haber sido solicitada la información de manera certificada, ésta tiene que ser entregada/remitida de manera física a efecto de satisfacer dicha característica, lo cual efectivamente no se lograría satisfacer de remitirse de manera digital, no siendo viable su remisión colocándola mediante el escaneo, ya que la certificación requerida perdería su formalidad y característica.

**QUINTO. VERSIÓN PÚBLICA.** Para la entrega de la información, en razón de que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, sino que encuentra como excepciones que la información sobre la cual se peticiona el acceso, sea o contenga datos que deban ser clasificados en los términos que la misma Ley de la Materia señala, el Sujeto Obligado tendrá que hacer la elaboración de una versión pública de los documentos que vaya entregar para dar cumplimiento a esta resolución, a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE** **RECURRENTE** sin menoscabar el derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Lo anterior, de conformidad a lo que señalan los artículos 3, fracciones IX, XX, XXXII, XLV; 6, 137 y 143 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, que se leen como sigue:

***“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:***

***IX. Datos personales:******La información concerniente a una persona, identificada o identificable*** *según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXXII. Protección de Datos Personales:*** *Derecho humano que tutela la privacidad de datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares;*

***XLV. Versión pública****: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.”*

***“Artículo 6.*** *Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos obligados no deberán proporcionar o hacer pública la información que contenga, con excepción de aquellos casos en que deban hacerlo en observancia de las disposiciones aplicables. En el caso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; los principios, procedimientos, medidas de seguridad en el tratamiento y demás disposiciones en materia de datos personales, se deberá estar a lo dispuesto en las leyes de la materia.”*

***“Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”*

***“Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable;*

*II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

*III. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”*

De los preceptos anteriores se desprende que cuando un documento que vaya a ser entregado vía acceso a la información pública, contenga tanto información de interés público como información que debe ser clasificada, se hará la entrega del mismo, testando las secciones o datos que deban ser clasificados; por ende el Sujeto Obligado deberá proceder a testar los datos personales que se encuentren contenidos en los documentos a entregar por parte del **SUJETO OBLIGADO** para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE** **RECURRENTE**, esto es, los datos concernientes a una persona identificada o identificable, o aquellos datos que tengan el carácter de sensibles, es decir los que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleven un riesgo grave para aquel de acuerdo a lo que señala la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México.

Datos que deberá clasificar como confidenciales por tratarse precisamente de información privada, puesto que los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables y los Sujetos Obligados no deberán hacer entrega de los mismos a personas ajenas a su titular.

En ese contexto, la clasificación de la información no opera con la simple supresión de datos que se haga en los documentos de que se trate o con la simple decisión que tome el Servidor Público Habilitado o el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, sino que ello deberá realizarse en términos de lo que disponen los artículos 49 fracción VIII, 53, fracción X y 59, fracción V, de la Ley en consulta, cuyo sentido literal es el siguiente:

***“Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información****…”*

*“****Artículo 53.*** *Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***funciones****:*

***X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información****…”*

***“Artículo 59.*** *Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las* ***funciones*** *siguientes:*

***V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información****, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta…”*

Denotándose de dichos elementos normativos que el determinar la clasificación de la información es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego ésta presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Para lo cual, a su vez en el caso de información de carácter confidencial, se debe atender a lo que señala el artículo 149 de la Ley de Transparencia Local vigente, que se lee como sigue:

*“****Artículo 149.*** *El* ***acuerdo que clasifique la información como confidencial*** *deberá contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.”*

Es decir, **EL** **SUJETO OBLIGADO** a través de su Comité de Transparencia, deberá elaborar acuerdo que contenga un razonamiento lógico con el que se demuestre que la información que se testa de las versiones públicas que se sirva elaborar, encuadra en alguna de las hipótesis que contempla la Ley de la Materia en su artículo 143; ya que de lo contrario, se crearía la incertidumbre jurídica en relación a si lo entregado es formalmente una versión pública, o un documento ilegible, incompleto o tachado; en otras palabras si no se exponen de manera puntual las razones de la versión pública de la documentación entregada se estaría violentando el derecho de acceso a la información de la parte solicitante.

Al respecto, se destaca que la versión pública que elabore **EL** **SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley; es decir, resulta necesario que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado emita el Acuerdo de Clasificación correspondiente debidamente fundado y motivado, que sustente la versión pública, el cual deberá cumplir cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ya expuesto; así como con los numerales aplicables de los **LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS**, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, mediante Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que literalmente expresan:

***“Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas***

*“****Segundo.-*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica,* ***fundando y motivando la*** *reserva o* ***confidencialidad****, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Cuarto.*** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***…***

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante*

*competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivos, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.*

*[…]*

***CAPÍTULO VIII***

***DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN***

***Quincuagésimo****. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero****. Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

*I. El número de sesión y fecha;*

*II. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

*III. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

*IV. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

*V. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

*I. Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

*II. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial;*

*III. El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

*IV. El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

***Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso específico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

*I. Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

*II. Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

*III. Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.*

***Quincuagésimo tercero. El formato para señalar la clasificación de un documento o expediente que contenga información reservada, es el siguiente:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Concepto*** | ***Dónde:*** |
| ***Sello oficial o logotipo del sujeto obligado*** | *Fecha de clasificación* | *Se anotará la fecha en la que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación del documento o expediente, en su caso.* |
| *Área* | *Se señalará el nombre del área del cual es titular quien clasifica.* |
| *Información reservada* | *Se indicarán las partes o páginas del documento que se clasifican como reservadas, o, en su caso, se precisará que se ha reservado el documento o expediente en su totalidad.* |
| *Periodo de reserva* | *Se anotará el número de años o meses por los que se mantendrá reservado el documento, el expediente o, en su caso, las partes o secciones reservadas.* |
| *Fundamento legal* | *Se señalará el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la reserva.* |
| *Ampliación del periodo de reserva* | *En caso de haber solicitado la ampliación del periodo de reserva originalmente establecido, se deberá anotar el número de años o meses por los que se amplía la reserva.* |
| *Rúbrica del titular del área* | *Rúbrica autógrafa o firma digital de quien clasifica.* |
| *Fecha de desclasificación* | *Se anotará la fecha en que se desclasifica el documento.* |
| *Rúbrica y cargo del servidor público* | *Rúbrica autógrafa o firma digital de quien desclasifica.* |
|

*Quincuagésimo cuarto. Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

*Quincuagésimo quinto. Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.”*

Efectivamente, cuando se clasifica información como confidencial es importante someterlo al Comité de Transparencia, quien debe confirmar, modificar o revocar la clasificación.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto Obligado a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante, por lo que el acuerdo respectivo, deberá hacerse del conocimiento de **LA PARTE** **RECURRENTE**.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Resultan fundados los motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **01259/INFOEM/IP/RR/2024,** por lo que, en términos del considerando **Cuarto** de esta resolución, se **MODIFICA** la respuesta emitida por **EL** **SUJETO OBLIGADO**.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO** en términos del Considerando **Cuarto y Quinto** de esta resolución, haga entrega de ser procedente en versión pública, vía **SAIMEX**, y en su caso copias certificadas (con costo) de lo siguiente:

1. Las actas generadas por las reuniones de la Comisión Especial de Amnistía referidas en respuesta.
2. Informe rendido en el Amparo Indirecto 1180/2022-VI.

*Para la entrega de la información a través de copias certificadas,* ***EL SUJETO OBLIGADO****, deberá notificar a* ***LA PARTE RECURRENTE****, a través del SAIMEX, el costo total por la reproducción y certificación de la información que se ordena, así como el procedimiento para la entrega de la misma en el que se establezca: procedimiento para realizar el pago correspondiente, lugar, día y horarios en los que podrá presentarse a recoger las copias simples certificadas y el nombre del o los servidores públicos que le atenderán.*

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición de* ***LA PARTE RECURRENTE****.*

**TERCERO. Notifíquese vía SAIMEX,** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, **EL SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a **LA PARTE RECURRENTE** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnar vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE), SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) XXII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados…” [↑](#footnote-ref-2)
3. BURGOA ORIHUELA Ignacio. Diccionario De Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Ed. Porrúa, S.A., México. 1992, p.115. [↑](#footnote-ref-3)
4. CIENFUEGOS SALGADO David. El Derecho de Petición en México. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM. México 2004. p. 31 [↑](#footnote-ref-4)
5. Carbonell, M. (2004). Los Derechos Fundamentales (Primera Edición ed.), México: Instituto de investigaciones Jurídicas. [↑](#footnote-ref-5)
6. VILLANUEVA VILLANUEVA Ernesto, Derecho de la Información, Ed, Porrúa S.A., México. 2006, pág.270. [↑](#footnote-ref-6)
7. ROBLES HERNÁNDEZ José Guadalupe. Derecho de la Información y Comunicación Pública. Ed.Universidad de Occidente de México, 2004, pág.72. [↑](#footnote-ref-7)